



EN LO PRINCIPAL: INTERPONE REQUERIMIENTO INAPLICABILIDAD INCONSTITUCIONALIDAD; **EN EL PRIMER OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE ACREDITAN QUE LA GESTIÓN JUDICIAL EN QUE ESTE REQUERIMIENTO INCIDE SE ENCUENTRA PENDIENTE; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; **EN EL TERCER OTROSÍ:** SOLICITA ALEGATOS; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER; **EN EL QUINTO OTROSÍ:** INDICA FORMA DE NOTIFICACIÓN; **EN EL SEXTO OTROSÍ:** PERSONERÍA.

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

NICOLAS ANDRES SALHUS MARDONES, abogado, cédula nacional de identidad 15.370.746-4, en representación convencional, según se acreditará, de **COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA**, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 79.982.490-6, ambos con domicilio para estos efectos en 1 oriente 1676 de la ciudad de Talca, a S.S. Excma respetuosamente digo:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República y los artículos 47 A y siguientes de la Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, venimos en interponer requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a fin de que se declaren inaplicables los preceptos legales dispuestos en el artículo 483-A inciso cuarto del Código del Trabajo, por cuanto dicha norma vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, ambos respecto de la gestión pendiente llevada ante la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”.

Se requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con el propósito que Vuestro Excelentísimo Tribunal, previo análisis jurídico,

declare la inaplicabilidad de la norma legal precitada, pues de su aplicación se derivaría un resultado lesivo contrario a las normas constitucionales indicadas, conllevando una consecuencia antijurídica y vulneratoria de las garantías constitucionales garantizadas en Chile.

I. ADMISIBILIDAD.

A. LEGITIMACIÓN ACTIVA (ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN Y ARTÍCULO 80 DE LA LOCTC).

La presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es deducida por mi representada, parte demandada en la gestión pendiente llevada ante la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”.

B. DEBE TRATARSE DE UN PRECEPTO LEGAL (ARTÍCULOS 81 Y 84 Nº 4 DE LA LOCTC).

Se debe considerar íntegramente acreditado el referido requisito de admisibilidad, toda vez que se impugna una norma contenida en la Ley Nº 483-A Del Código Del Trabajo, que en definitiva se continuara con la ejecución de autos, sino existe fianza de resultas por parte del demandante, en los termino que se relatara en los párrafos que siguen.

C. QUE EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO NO HUBIERE SIDO DECLARADO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN (ARTÍCULO 84 Nº 2 DE LA LOCTC).

El presente requerimiento cumple con este requisito de admisibilidad toda vez que no existe pronunciamiento preventivo, ni de control de constitucionalidad ex post, en que se invoque el mismo vicio.

D. EXISTENCIA DE UNA GESTIÓN PENDIENTE (ARTÍCULO 93 Nº 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y ARTÍCULO 84 Nº 3 DE LA LOCTC).

En su sentido natural y obvio, tal requisito debe entenderse satisfecho siempre que exista una gestión judicial que no ha concluido, tal como ocurre en el presente caso.

La gestión pendiente en la que incide la aplicación del precepto impugnado corresponde al proceso seguido ante la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, , vigente y en tramitación según consta en certificado acompañado en un otrosí de esta presentación, los cuales también se hará alusión en los párrafos que siguen.

E. LA APLICACIÓN DEL PRECEPTO IMPUGNADO DEBE TENER APLICACIÓN Y RESULTAR DECISIVO EN LA RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN PENDIENTE (ARTÍCULO 93 INCISO 11º, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ARTÍCULOS 81 Y 84 Nº 5 DE LA LOCTC).

De continuarse con la ejecución de autos, sin ser resultado el recurso de unificación de jurisprudencia, que es de lo que trata la gestión pendiente, a carrera perjuicios a este legítimo contradictor, entendiéndose se además se estarían afectando las normas procedimentales y en consecuencia garantías constitucionales, tal como esta parte se explayara en los párrafos que siguen.

II. SOLICITUD DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO IMPUGNADO Y PROFUNDIZACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA ADMISIBILIDAD.

1-. Así las cosas, por esta vía se **persigue se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 483- A inciso 4 del Código del Trabajo**, en aquella parte que dispone que:

“La interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso. La parte vencida podrá exigir que no se lleve a efecto tal resolución mientras la parte vencedora no rinda fianza de resultas a satisfacción del tribunal. El recurrente deberá ejercer este derecho conjuntamente con la interposición del recurso y en solicitud separada.”

2-. **En cuanto a la admisibilidad del presente requerimiento, esta se verifica mediante el cumplimiento de todos los requisitos previstos**, a saber:

- a) **Existencia de gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 inciso 11° de la Constitución Política, *“Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial (...)”*.

Pues bien, en la especie la gestión pendiente corresponde al recurso conocido por la Excelentísima Corte Suprema, que se encuentra actualmente pendiente y en trámite, cuyo Rol de Corte corresponde a la causa N° 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, el cual,

desde el 17 de mayo de 2022, está en estado para dar cuenta de admisibilidad en la sala respectiva.

Dicho recurso, viene del recurso de nulidad de la Ilustrísima corte de Apelaciones de Talca, rol corte 72-2022, este último, que certifico que no existe fianza de resultas, en base a lo anterior, el demandante solicita en juicio de primera instancia del Juzgado De Letras Del Trabajo De Talca, rit T-12- 2021, certificar la ejecutoriedad de la sentencia remitiendo los antecedentes para comienzo de la ejecución de autos.

En atención a ello, se requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 483 letra A del Código del Trabajo, puesto que su aplicación en la especie resulta contraria a la Constitución Política de la república, toda vez que permite la ejecución de los autos sino se solicita la rendición de fianza de resultas. Los hechos que motivan la gestión pendiente, y que inciden en el proceso y el precepto impugnado, se trata de un proceso laboral , en que resulta esencial discutir si presentar una licencia médica extemporánea, justifica la causal de término del contrato por el artículo 160 N° 3 del Código del trabajo, y cuando ya había tomado conocimiento del despido y así, continuar con la tramitación del recurso de unificación conforme al art 483 y siguientes del Código del Trabajo, por lo que, si se **continúa con la ejecución de autos y se apertura una causa de cumplimiento y eventualmente se pagara a lo que fue sentenciado, y en la gestión pendiente tiene un resultado positivo**, estimando que la causal de termino de contrato aplicada en su oportunidad es conforme a la ley y que la presentación de una licencia médica extemporánea no justifica la ausencia de la trabajadora u otro antecedente que pueda derivar del juicio, **enmendando la sentencia, revocándola o rebajando alguna indemnización, lo cierto es que afectaría directamente a mi representada. En efecto, el perjuicio económico** es evidente, pues eventualmente al haberse pagado en la etapa ejecutiva los dineros sentenciados, y revocar el máximo tribunal, la única forma de subsanar aquello eventualmente seria retrotraer todo al estado anterior, sin embargo,

en ese caso, ¿EL DEMANDANTE DEBERA DEVOLVER LOS DINEROS QUE POR EXCESO ESTA PARTE PAGO EN CASO DE MODIFICARSE LA SENTENCIA?

EN CONSECUENCIA, CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN ESTANDO PENDIENTE EL RECURSO DE UNIFICACIÓN, QUE EVENTUALMENTE PUDIERE AFECTAR LO QUE YA HA SIDO RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE LA INSTANCIA, ES CONTRARIO A LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO A LA LEGITIMA DEFENSA DE ESTE CONTRADICTOR Y A LAS DEMÁS NORMAS QUE SE EXPONDRÁN EN LOS PÁRRAFOS QUE SIGUEN.

B) Acreditación del juicio pendiente: En el primer otrosí de esta presentación, se acompañan los documentos pertinentes para acreditar debidamente la existencia de la gestión pendiente a que previamente se ha hecho alusión. Con ello me refiero a :

- Recurso de Unificación de Jurisprudencia ventilado ante la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”.
- Certificado de ingreso de la causa Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista ante la Excelentísima Corte Suprema.
- Solicitud de certificación de fianza de resultas y su respectiva resolución en el juicio rol 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, de la Ilustrísima Corte De Apelación De Talca.

- Solicitud de que se tenga firme o ejecutoriada la sentencia en causa del Juzgado De Letras Del Trabajo De Talca, rol t-12-2021, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”
- E-book de la causa Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista ante la Excelentísima Corte Suprema.
- E-book de la causa Rol de Corte 72-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca.

c) El precepto legal impugnado resulta decisivo para la resolución del asunto: La norma impugnada resulta decisiva para la resolución del asunto, toda vez que limita las posibilidades de defensa de mi representada, lo que materialmente ha implicado que esta parte no ha podido acceder a un proceso justo y racional, pues de continuarse con la ejecución de autos frente a una eventual revocación de la sentencia, genera un perjuicio económico evidente además de las normas procesales y procedimentales existentes y aquello ha sido irreflexivamente el precepto dispuesto por la norma cuya inaplicabilidad se solicita.

Desde esta perspectiva, la declaración de inaplicabilidad solicitada es determinante, pues la resolución del tribunal al acoger el recurso de la cuestión pendiente y a su vez continuar con la ejecución del juicio en un proceso de cumplimiento de sentencia, depende en gran medida de la aplicabilidad de la norma en comento, y su incidencia influye directamente en cualquier decisión que en aquel proceso se adopte en lo venidero.

III. ANTECEDENTES QUE GENERAN EL JUICIO Y LA GESTIÓN PENDIENTE.

3.- Causa primera instancia:

- **DEMANDA:** Que con fecha 08 de octubre de 2021 se presenta Demanda en Procedimiento ordinario sobre Tutela Laboral, por despido lesivo de derechos fundamentales y en subsidio, demanda por despido injustificado, indebido o improcedente, en contra Sociedad Comercial Multicentro LTDA., R.U.T.: 79.982.490-6, todas representadas legalmente por Gustavo Adolfo Rivera Rivera, Cedula nacional de identidad N°: 7.453.616-6.- Con el objeto de que declare :

1) Que mi presentada, con ocasión del despido de fecha 9 de septiembre del año 2021, ha vulnerado los derechos fundamentales amparados por el artículo N°485 del Código del Trabajo.

2) Se condene a la empresa, al pago de la suma de \$ 9.934.797.-, por concepto de la indemnización establecida en el artículo N°489 inciso tercero del Código del Trabajo, correspondiente a 11 remuneraciones mensuales, teniendo como base de cálculo la última remuneración de la denunciante de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, o la suma que el tribunal estime conveniente en mérito del proceso.

3) Se condene a mi mandante, al pago de la suma de \$ 3.612.653.- por concepto de indemnización por 4 años de servicio, o la suma que el tribunal estime conveniente en mérito del proceso.

4) Se condene a la empresa, al pago de la suma de \$903.163.- por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, o la suma que S.S. estime conveniente en mérito del proceso.

5) Se condene a la empresa, al pago de la suma de \$ 2.890.123.-, por concepto de 80% de recargo a la indemnización por años de servicio, al

haberse aplicado una causal improcedente de despido al tenor de lo establecido en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo, o la suma que el tribunal de la instancia, estime conveniente en mérito del proceso.

6) Se condene a la empresa, al pago de la suma de \$657.000.-, por concepto de feriado legal y proporcional, o la suma que el tribunal estime conveniente en mérito del proceso.

7) Declarando que todos los montos exigidos por la denunciante sean reajustados mediante los intereses legales que correspondan.

8) Solicita se condene a mi representada, al pago de las costas del juicio.

A su vez, en subsidio, la demandante interponer demanda en procedimiento ordinario, despido injustificado, indebido e improcedente y cobro de prestaciones, en contra de COMERCIAL MULTICENTRO LTDA, para lo cual solicita al tribunal tener por reproducidos todos y cada uno de los argumentos de hecho y derecho expresados en lo principal de su presentación, con objeto de que el tribunal de la instancia, declare que el despido del que fue objeto es injustificado, indebido e improcedente, y que por lo tanto solicita:

1) Condene, al pago de la suma de \$ 3.612.653.-, por concepto de indemnización por 4 años de servicio.

2) Se condene, al pago de la suma de \$903.163.-, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.

3) Se condene, al pago de la suma de \$ 2.890.123.-, por concepto de 80% de recargo a la indemnización por años de servicio, al haberse aplicado una causal improcedente de despido al tenor de lo establecido en el artículo 168 letra c) del Código del Trabajo.

4) Condene, al pago de la suma de \$657.000.-, por concepto de feriado legal y proporcional.

5) Declare que todos los montos exigidos en la parte petitoria de la demanda, sean reajustados mediante los intereses legales que correspondan.

6) y finalmente, solicita que mi representada sea condenada al pago de las costas del juicio.

-. CONTESTACION: Que con fecha 18 de noviembre de 2021, se contestó la demanda, exponiendo en síntesis lo siguiente: Que se rechace la demanda, y que se tenga por negados todos y cada uno de los hechos. Basado en que, tal como indica la carta de termino de contrato, el despido se produce porque la ex trabajadora no concurrió a desempeñar sus funciones los días 1, 2, 3, y 4 del mes de septiembre del año 2021, fundándose en la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, de cual se dejó constancia por parte de mi representada, con fecha 6 de septiembre de 2021.

Exponiendo esta parte, que, no es efectivo lo expuesto en la denuncia en cuanto a que los días 1,2,3 y 4 la ex trabajadora estaba con licencia médica, no tenemos registro alguno de licencia médica de esas fechas ni envíos de forma electrónica considerando que estamos incorporados a dicha modalidad, hecho que era de conocimiento de la demandante, por ende, puede existir un posible ilícito penal de la demandante, haciendo un uso fraudulento de tal instrumento, o habiendo obtenido algún subsidio de forma irregular.

Indicando finalmente que, no existían antecedentes de vulneración de derechos fundamentales y que el despido estaba justificado, pidiéndole al tribunal que se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

-. AUDIENCIA DE JUICIO Y SENTENCIA: Desarrollándose la audiencia de juicio con fecha 14 de diciembre de 2021, rindiéndose toda la prueba, para posterior proceder a dictar sentencia con fecha 27 de diciembre de 2021, exponiendo:

“EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL Que, SE RECHAZA la denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimiento de tutela laboral, deducida por doña MARCIA JUDITH ANGULO BELTRÁN, R.U.N. N° 17.233.706-6, en contra de COMERCIAL MULTICENTRO LTDA., R.U.T. N° 79.982.490-6, representada por don Gustavo Rivera Rivera, todos ya individualizados.

EN CUANTO A LA DEMANDA SUBSIDIARIA

I.- Que, SE ACOGE las demanda subsidiariamente interpuesta por doña MARCIA JUDITH ANGULO BELTRÁN, R.U.N. N° 17.233.706-6, en contra de COMERCIAL MULTICENTRO LTDA., R.U.T. N° 79.982.490-6, representada por don Gustavo Rivera Rivera, R.U.N. N° 7.453.616-6, todos ya individualizados, y por ende SE DECLARA que el despido del que fue objeto la actora es indebido, CONDENÁNDOSE a la demandada a pagar a la demandante, la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 3.612.732.-) por concepto de indemnización por años de servicio, en razón de cuatro años; la suma de NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (\$ 903.183.-) por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo; la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 2.890.185.-) por concepto de recargo legal del 80% contenida en el artículo 168 letra C) del Código del Trabajo; más la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 541.910.-), por concepto de feriado legal, en razón de 18 días hábiles.

II.- Que, todas las sumas señaladas serán pagadas reajustadas con los intereses legales determinados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 163 del Código del Trabajo.

III.- Que, en virtud de los resultados de las Litis principal y subsidiaria; cada parte pagará sus costas.

IV.- Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase la misma dentro de quinto día, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia, pasando los antecedentes a la unidad de cumplimiento ejecutivo del Tribunal.”

4.- Segunda Instancia.

-. **RECURSO DE NULIDAD:** Frente a este escenario, esta parte interpone recurso de nulidad, por haber incurrido la sentencia definitiva en la infracción del artículo 477 del mismo cuerpo normativo (infracción de Ley), ya que ha trasgredido el artículo 160 n° 3 y art. 11 del decreto supremo n° 3 del reglamento de autorización de licencias médicas por las Compín e instituciones de salud previsional y en subsidio por el artículo 478 letra C del Código del Trabajo, “(...) cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”.

Respecto de la primera causal se expuso que:

El sentenciador al aplicar la ley ha vulnerando y quebrantando el artículo 160 N° 3 del código del trabajo, al restarle valor a la oportunidad en que la demandante justifico sus inasistencias. En este orden de ideas, al desechar que el despido es justificado y debido, quebranto la disposición legal en referencia, pues a la época de su interposición, cumplía con los requisitos exigidos para despedir a la trabajadora por la causal invocada. A este respecto, cabe señalar que el artículo 160 N° 3 del Código del trabajo regula la causal de termino relativa a la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo.

Indicando que, se incurrió en el error de derecho denunciado al sentenciarse que la presentación de las licencias médicas, con un mes de retaso tornaría en justificadas la inasistencia de la trabajadora

Respecto de la segunda causal se precisó:

Que, con todos estos hechos se probó con la prueba aportada en su oportunidad, especialmente por la prueba documental, esto es, libro de asistencia y fotografías de dicho libro, que la trabajadora efectivamente se ausento los días 01,02,03 y 04 de septiembre de 2021 y conforme a las declaraciones de todas las partes y absolventes, el doctor tratante, le dio una licencia a la trabajadora, por los días de ausencia en días posteriores. Así, la conducta de la trabajadora, que comunicó al empleador, que presentaría una licencia médica, se materializó recién 28 de septiembre de 2021, encuadrándose en la hipótesis de la causal de término del contrato invocada por el empleador y que contempla el N° 3 del artículo 160 del Código del Trabajo; DESDE QUE SU CONDUCTA NO CONSTITUYE UN BUEN OBRAR Y LABORAR, POR CUANTO LOS REFERIDOS PERMISOS MÉDICOS, QUE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR EN FORMA ABSOLUTAMENTE EXTEMPORÁNEA, lo que sin duda determina que las ausencias a sus labores lo fueron sin causa justificada. En efecto, la licencia medida se presentó casi un mes después de las ausencias de la trabajadora, esto es, fuera del plazo que establece la ley para poner en conocimiento del empleador. Que, se verificaron LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA CARTA DE TÉRMINO DE CONTRATO Y DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CAUSAL INVOCADA, Sin embargo EL TRIBUNAL ERRO EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA ya que la demandante, no concurre a trabajar en los días indicados en la carta de término de contrato e intenta justificar ausencia con licencia extemporánea.

Esto es reafirmado, por prueba nueva que se acompañó en conjunto con el recuerdo de nulidad, consistente en ordinario 401 de fecha 3 de enero de 2020, en virtud del cual el presidente de la Compín Luis Albornoz Figuerola dirige ordinario a Cristian Fuentes Castillo, representante convencional de comercial multicentro limitada, donde indica que de acuerdo a la denuncia con fecha 13 de diciembre de 2021, debido a licencia médica tramitada en la unidad de licencias médicas del Hospital de Constitución, investigación

realizada a la ex trabajadora de mi representada Sra. Marcia Angulo Beltras, evidenciando que esta fue emitida y presentada fuera de plazo, y como consecuencia de aquello, la campin procedió a modificar la resolución y rechazar las licencias N° 40151278 y 58402666.

De esta forma, la sentencia ha incurrido en el vicio que por esta vía del recurso de nulidad se denunció, por haber asignado como injustificado el despido, a pesar de los hechos establecidos por tribunal, independiente de la conclusiones y presunciones de opinión que hace el tribunal, los hechos ciertos, dejan evidencia que la trabajadora no concurrió a trabajar y que presento licencia casi un mes después, extemporánea, llegando a la única conclusión, que el despido es absolutamente justificado y debido, por lo que el recurso de nulidad debiera ser acogido.

5-. Recurso de Unificación de Jurisprudencia.

Recurso presentado 18 de abril de 2022, basado en que presentar una licencia médica extemporánea, justifica la causal de término del contrato por el artículo 160 N° 3 del Código Del Trabajo, siempre considerando, las casuísticas del caso a caso, pues tal como en caso de marras, esta se presentó casi un mes después de las ausencias, y cuando ya había tomado conocimiento del despido. Además, se pretendió justificar la inasistencia con un documento que no contenían el rut ni el nombre del empleador, para con posterioridad conseguirse una licencia médica de 28 días después desde el comienzo de las inasistencias, lo que en ningún caso justifica las ausencias. Además, que eventualmente se considere que una licencia médica extemporánea, pudiera servir para justificar las ausencias, no exime al demandante a justificar su retraso, pues conforme a la buena fe, el contrato trabajo tiene obligaciones para ambas partes, y si una licencia médica autoriza al demandante para ausentarse de sus funciones, no es menos cierto, que no lo autoriza a incumplir con sus otros deberes inherente al trabajo, que es informar de la ausencia, dentro de un plazo razonable, dándole seguridad jurídica al empleador. Sin

embargo, en el caso en cuestión, la demandante no justifico el retraso de la licencias médicas, es más de la misma declaración de la absolvente, se vislumbró que ella, no concurrió a trabajar para cuidar a sus hijos y no por la supuesta enfermedad de la demandante, según explico está, en la audiencia respectiva. Y en entonces, ¿la licencia médica extemporánea según la casuística del caso de marras justifica las ausencias?, la respuesta claramente es negativa. ¿puede ser justificación cuidar a los niños cuando la licencia médica no era por ese motivo sino por supuesta enfermedad de la madre, otorgada casi un mes después de las ausencias ?, y en consecuencia ¿la demandante justifico el retraso de la licencia médica? evidentemente no lo hizo. Cuestiones de derecho que debe resolver la Excelentísima Corte, pero sin desconocer el caso a caso, como tantas veces ha hecho mención en innumerables fallos.

Que, a la presentación de este recurso de unificación, la demandante pide se certifique que no se ha pedido fianza para continuar con la ejecución de autos, esto es con fecha 31 de mayo de 2022, que en definitiva le da origen a este requerimiento.

IV. PRONUNCIAMIENTO DEL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE DENUNCIAN.

A.- Igualdad ante la justicia, Artículo 19 N° 3 inciso primero de la Constitución

Política: La norma citada, asegura a todas las personas “la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”.

El ámbito de protección que garantiza la referida norma, dice relación con la aplicación de la ley en sus diversos aspectos, específicamente y en lo

que interesa al presente requerimiento, alude a aquellas situaciones en que las personas actúan en defensa de sus derechos ante la autoridad competente, comprendiendo tanto las acciones y derechos que se deduzcan ante los tribunales de justicia.

Esta garantía constitucional exige al legislador una igual **protección en el ejercicio de los derechos de las personas**, mandato que no puede contrariar, sin incurrir en inconstitucionalidad, lo que ocurre en la especie al aplicarse el artículo 483 -A inciso cuarto del Código del Trabajo.

Así las cosas, la norma impugnada establece una evidente desigualdad que vulnera la **igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, al permitir la ejecución de un juicio al existir procesos pendientes, lo cual se aplica única y arbitrariamente en contra del ejecutado, estableciendo en su contra una desprotección que le impide, en la especie, cuestionar lo que esta parte alega en el recurso de unificación de jurisprudencia, produciéndose así una discriminación que no se produce respecto de ningún otro proceso en nuestro sistema jurídico**, pues aquello implica justificar la sentencia, a pesar de existir recursos pendientes y si eventualmente se acoge el recurso alegado y se revoca lo sentenciado por el tribunal de primera instancia, causa perjuicios económicos a mi representada, además de la afectación a la igualdad ante la ley, por cuando en aquellos se se pida fianza de resultas, si se suspende la ejecución de los procesos.

En consecuencia, **la aplicación del precepto impugnado establece una diferencia arbitraria, injusta e irracional**, entre la situación del demandado. En efecto, en el primer caso, si se solicita fianza de resultas, se suspende el proceso y el cumplimiento de la sentencia, por existir un juicio o recurso de unificación pendientes, sin embargo al verse restringido este derecho solo en caso de existir fianza, limita nuestras defensas por cuanto no tendría razón de ser o “sentido” continuar con el conocimiento de un recurso que en la práctica ya se habría obtenido el pago de lo que fue sentenciado en primera instancia.

Carecería de razón de ser, el recurso de unificación de jurisprudencia al que alude el Código Del Trabajo.

En consecuencia, **los órganos del Estado no pueden tratar a las personas según su libre consideración, ni tampoco pueden realizar tratamientos diferenciados** en función de criterios diversos como las características personales de clase, actividad, profesión o sector a que pertenezca la persona. La igualdad ante la ley tiene un carácter relativo y proporcional, permitiendo que el legislador realice distinciones cuando éstas se encuentran justificadas.

En este sentido, **la igualdad supone además una distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición**, pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, sino que esta diferenciación sea arbitraria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que las autoridades se encuentran facultadas para establecer diferencias o nivelaciones, siempre que no sean arbitrarias. (Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 249, 4 de noviembre de 1996.) En la doctrina se han elaborados diversos criterios de fondo que apuntan a dilucidar cuándo una diferencia es arbitraria.

Así por ejemplo, Enrique Evans de la Cuadra señala que *"se entiende por discriminación arbitraria toda diferenciación o distinción, realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación razonable"*. **(Enrique Evans De la Cuadra, Los Derechos Constitucionales; tomo 11, tercera edición actualizada, Editorial Jurídica, Santiago, pág. 124).**

Por su parte, según señalan los profesores Verdugo, Pfeffer y Nogueira, la igualdad ante la ley " (...) se trata de una igualdad jurídica que impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se

concede a otros en iguales circunstancias" (Verdugo, Pfeffer Y Nogueira, Derecho Constitucional Tomo 11, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, pág. 208). 14)01)013.

En otras palabras, la igualdad jurídica se traduce en la imposibilidad de establecer diferencias entre iguales, estableciéndose la opción del constituyente que a fin de que todos los que se encuentran en una misma categoría, situación o circunstancias, sean tratados de manera similar por la norma legal, sin que existan entre ellos privilegios o diferencias arbitrarias.

Sobre la base de estas precisiones SS. Excma. ha señalado que *"la discriminación o diferenciación per se no necesariamente es contraria al texto fundamental, sino en la medida que ella no obedezca a parámetros de razonabilidad o justificación suficiente"*. Y para justificar la razonabilidad o justificación de la distinción se requiere un análisis en tres pasos:

- (i) identificar la finalidad del acto potencialmente arbitrario,
- (ii) analizar si esa finalidad tiene respaldo en nuestro ordenamiento jurídico y
- (iii) evaluar la racionalidad y proporcionalidad del acto en cuestión, en relación con su finalidad.

Así, el acto resultará arbitrariamente discriminatorio si es caprichoso, es decir no tiene finalidad razonable, si su finalidad está proscrita por el ordenamiento jurídico o si no es adecuado respecto a la finalidad perseguida. **En dicho orden de ideas, SS. Excma. también ha manifestado que si bien el legislador posee un amplio margen a la hora de regular las relaciones sociales debe cuidar que las restricciones al goce de los derechos.**

B-. Derecho a defensa jurídica y debido proceso, Artículo 19 N° 3, inciso segundo de la Constitución Política: La norma dispone *"Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o*

individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”.

El derecho citado **es la facultad que le asiste a todas las personas de intervenir en el proceso a fin de defenderse de las pretensiones de la contraparte**, de manera tal que no es constitucionalmente posible que la ley limite el legítimo ejercicio del derecho a defensa, a tal punto de llegar a establecer normas que permitan suprimir el referido derecho, al permitir la ejecución de un juicio que aun esta pendiente y eventualmente se pudiese revocar la sentencia.

Vuestro Excelentísimo Tribunal ya dijo en sentencia de causa **Rol N° 376-2006** que: *“el derecho a la defensa jurídica debe poder ejercerse, en plenitud, en todos y cada uno de los estadios en que se desarrolla el procedimiento, en los cuales se podrán ir consolidando situaciones jurídicas muchas veces irreversibles”.*

Naturalmente lo anterior no quiere decir que el legislador no pueda establecer plazos, procedimientos y formalidades que doten al ejercicio de la defensa de racionalidad y sentido de oportunidad. **Así lo explica otro fallo de Vuestro Excelentísimo Tribunal, en causa Rol N° 977-2007**, donde señaló lo siguiente: *“Desde luego, la Carta Fundamental, al garantizar el derecho a la defensa, no asegura a todas las personas ejercer sus derechos sin ningún tipo de obstáculos, ni les garantiza conducir sus defensas conforme a su leal saber y entender. Un entendimiento así de absoluto del derecho a defensa impediría toda regla procesal que sujetara la defensa a ciertos plazos, ritualidades o limitaciones. Con ello se haría imposible toda regla procedimental, no pudiendo alcanzarse la justicia y racionalidad de los procedimientos que la Constitución exige al legislador. El derecho a la defensa está efectivamente garantizado por la Constitución, pero debe ejercerse en conformidad a la ley. La Constitución no prohíbe reglas de ritualidad procesal; sólo les exige que permitan la defensa y garanticen racionalidad y justicia.”*

Al permitir la ejecución por la fianza de resultas en cuestión, el legislador ha establecido un obstáculo para el ejercicio del derecho a defensa, pues si se obtiene ejecutivamente el cumplimiento, el recurso de unificación carece de fundamento, pues ya estaría cumplido con lo sentenciado y frente a una eventual revocación de la sentencia, habría que retrotraer todo al estado anterior del pago. ¿entonces el demandante debiera devolver lo que en exceso recibió? Lo que resulta ser determinante para la resolución del asunto, y que son de todo pertinentes para alcanzar la justicia material en el caso concreto. Lo anterior, toda vez que dichas alegaciones tienen que ver con el cumplimiento de la obligación, contempladas en la norma requerida de inaplicabilidad.

Así las cosas, la limitación establecida por la norma impugnada no permite garantizar las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos de mi representada, que actualmente se encuentran bajo consideración judicial.

En consecuencia, el legislador ha dejado a mi representada en una total indefensión, ya que no cuenta con medio legal alguno a través del cual pueda impetrar la defensa, en caso de continuarse y obtener el cumplimiento de lo sentenciado en un proceso ejecutivo, que por las características del derecho laboral, se trata un juicio rápido y que va avanzando con mucha celeridad, por lo que permitir la ejecución sin fianza de resultas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483-A inciso cuarto del Código del Trabajo, no es procedente, contraviene el derecho a defensa de mi representada y las normas procesales existentes en la constitución política de la republica, como así mismo la igualdad ante la ley.

COMPETENCIA CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita en el mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se traduce en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control.

Sin embargo, requerido el Tribunal Constitucional para que se pronuncie acerca de la plausibilidad de las razones que se tuvieron en cuenta para dar el trato diferenciado, procede que se superpongan las valoraciones de la Constitución y que V.S. Excma. asuma la defensa de ésta, es decir, de los derechos esenciales de las personas, incluso respecto de la ley, la que solo manifiesta la voluntad soberana cuando respeta la supremacía constitucional.

POR TANTO: En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política, solicito a V.S.E., se tenga por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se admita a tramitación, por existir una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, cuyo precepto legal impugnado resulta decisivo para la resolución del asunto y por haberse fundado claramente en una infracción; y en definitiva se declare la inaplicabilidad del artículo 483-a, inciso cuarto, del Código del Trabajo, por resultar contrario a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política en cuanto al derecho de igualdad ante la Ley, derecho a defensa jurídica y derecho al debido proceso.

PRIMER OTROSI: Ruego S.S. Excelentísima tener por acompañados los siguientes documentos, que dan cuenta de la gestión pendiente.

- Recurso de Unificación de Jurisprudencia ventilado ante la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”.
- Certificado de ingreso de la causa Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista ante la Excelentísima Corte Suprema.
- Solicitud de certificación de fianza de resultas y su respectiva resolución en el juicio rol 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, de la Ilustrísima Corte De Apelación De Talca.
- Solicitud de que se tenga firme o ejecutoriada la sentencia en causa del Juzgado De Letras Del Trabajo De Talca, rol t-12-2021, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA” y su certificación respectiva.
- E-book de la causa Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista ante la Excelentísima Corte Suprema.
- E-book de la causa Rol de Corte 72-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, vista Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca.

SEGUNDO OTROSÍ: En virtud de lo establecido en el inciso undécimo del artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, pido a S.S. Excma., se decrete la suspensión inmediata del procedimiento judicial la Excelentísima Corte Suprema, Rol de Corte 12796-2022, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, y también el procedimiento ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca en causa RIT t-12-2021, caratulada “ANGULO/COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA”, y en su defecto, en caso de alcanzar iniciarse procedimiento ejecutivo entre ambas partes, también se suspenda.

La petición se funda en que la gestión pendiente en que no debiera aplicarse la norma legal, que se impugna. Este recurso tiene una tramitación rápida y expedita, lo que puede llevar a que se falle la causa sin esperar el pronunciamiento de este Excmo. Tribunal Constitucional, haciendo con ello inútil la resolución de V.S.E. en esta controversia.

Lo anterior provocaría un grave perjuicio irreversible para mi representada, ya que se iniciaría la ejecución del título ejecutivo antes de dar lugar a la defensa de esta parte.

Atendido la actual etapa procesal de la gestión pendiente, ésta podría ser resuelta con anterioridad a la resolución de V.S.E., en cuyo caso no se cumpliría la garantía protectora del recurso de inaplicabilidad.

En este contexto, y a fin de resguardar y garantizar efectivamente los derechos de mi representada y hacer eficaz la resolución que se adopte en esta causa, se suspenda el procedimiento judiciales antes mencionados. **En caso contrario, carecería de sentido y eficacia la presente acción y con ello se estaría aceptando la vulneración de los derechos constitucionales de mi representada.**

TERCER OTROSÍ: Atendida la importancia de la materia sometida a la decisión de V.E.T., es que solicitamos en virtud del artículo 32 B de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, conceder a esta parte, alegatos en la vista de la causa.

CUARTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma tener presente que asumiré el patrocinio y poder de la presente causa en mi calidad de mandatario judicial de la sociedad requirente y de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

QUINTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. autorización para ser notificado de las resoluciones de autos a los siguientes correos electrónicos: Salhus@estudioslegales.cl y munoz@estudioslegales.cl

SEXTO OTROSÍ: Solicito a S.S. Excma. tener por acompañada mi personería para representar a la sociedad requirente multicentro conforme patrocinio en la causa que genera los presentes autos.